

EN TORNO A «EL RETO EUROPEO...», DE JOSE VIÑALS

Joaquím MUNS (*)

EL momento presente de la economía española es serio y el Sr. Viñals aporta datos suficientemente convincentes para demostrarlo. En particular, la seriedad de la situación deriva de dos tipos de consideraciones incluidas en el estudio que estamos comentando. Por una parte, los importantes desequilibrios acumulados por la economía española; por otra, su gran sensibilidad coyuntural, que hace que en períodos difíciles se pierdan muchos de los logros conseguidos en las fases expansivas.

No hay duda de que, como señala el autor, los mercados de bienes y servicios, de trabajo y financieros presentan serias deficiencias que se hallan en la base de la situación a la que ha llegado la economía española. Pero indudablemente ésta no sería tan grave, a nuestro juicio, si las políticas del sector público no hubieran hipotecado, en los últimos años, todas las posibilidades que ofreció una situación coyuntural particularmente positiva.

Esta fuerte incidencia del sector público español en el funcionamiento de la economía se ha producido en una fase particularmente delicada: la de la adaptación a las exigencias del mercado único. La teoría y práctica demuestran que en un mercado común se producen una serie de transformaciones de las estructuras económicas y se confía en que también se den una serie de reacciones positivas de los agentes económicos.

Entre las transformaciones seguras que cabía prever, y que se han producido, está un acercamiento, e incluso en algunos casos igualación, de los costes y precios españoles con los del resto de la CE. Este efecto es prácticamente automático por la propia esencia del juego de

los mecanismos del mercado más amplio, tanto de bienes como de factores de producción, que se crea.

Lo que no es tan seguro que se produzca (es más, se trata de un resultado totalmente inseguro) es un acercamiento de las productividades; en este caso, de España con el resto de la CE. Este acercamiento debe correr paralelo al de costes y precios si la integración ha de resultar asumible y beneficiosa. De lo contrario, se produce una fuerte tensión en los equilibrios fundamentales del país.

Esta dicotomía es la que se ha producido en el caso español. Los costes y precios se han acercado —y en algunos casos superado— a los de la CE, mientras que la evolución de la productividad ha sido mucho menos satisfactoria. Ello ha llevado a una clara pérdida de competitividad de la economía española.

El papel del sector público en esta evolución ha sido determinante. Es evidente que el sector privado productivo ha de ser, con su reacción dinámica y positiva, el gran motor de una adaptación como la que requiere la plena incorporación a la CE. Esta responsabilidad es intransferible, pero debe verse respaldada por una política macroeconómica adecuada.

Un análisis, siquiera sea somero, de la economía española en los últimos años pone de manifiesto que el sector público no sólo no ha acompañado la adaptación del sector privado a la CE, sino que, por el contrario, se ha erigido en el protagonista de la economía.

El cuadro n.º 1 muestra claramente cuál ha sido el resultado de este protagonismo: a partir de 1987, en términos netos las administraciones públicas han absorbido a través de su

déficit no sólo todo el ahorro neto interior sino también el exterior.

Obsérvese en el cuadro otro elemento importante del panorama económico español de los últimos años: el descenso del ahorro neto del sector privado y muy significativamente de las familias y de las empresas no financieras. Estudios muy solventes ligan el fuerte descenso de la propensión al ahorro de las familias con la creciente carga fiscal que ha pesado sobre ellas en los últimos años.

El peso creciente y absorbente del sector público español se ha traducido en una decisiva dependencia del funcionamiento financiero de la economía respecto a él. En efecto, la conjunción de sus crecientes necesidades de fondos y la menor generación de ahorro neto interno ha transferido el protagonismo financiero al ahorro exterior.

Para captar esta financiación exterior, la política económica ha debido instrumentar tipos de interés lo suficientemente elevados para atraer esos fondos. Esta entrada de ahorro exterior se ha producido en tales cantidades que incluso ha ido forzando, hasta septiembre del pasado año, una constante apreciación tanto nominal como real del tipo de cambio de la peseta. De esta manera, los inversores extranjeros han extraído un doble beneficio: un diferencial a su favor del tipo de interés y una apreciación de la peseta. Con este doble premio, que en algunos momentos ha arrojado ganancias imposibles de obtener en otras partes del mundo, España se ha asegurado una fuente aparentemente inagotable de recursos foráneos sobre los que asentar un fuerte crecimiento económico.

Por lo tanto, los mecanismos financieros han actuado de correa de transmisión por la que se han extendido al resto de la economía los efectos de la creciente necesidad de recursos que exigía —y exige— el déficit público. De esta manera, se ha producido un *crowding-out* del sector privado (menos recursos disponibles y más caros) en el peor momento para ello, es decir, en el de una difícil adaptación a un marco

CUADRO N.º 1

ECONOMIA ESPAÑOLA. CUENTAS DE UTILIZACION DE RENTA Y CAPITAL
(En porcentajes del PIB)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de la nación.	1,4	1,7	0,2	-0,9	-2,9	-3,2	-2,9
Administraciones públicas	-6,9	-6,0	-3,2	-3,3	-2,7	-3,4	-4,4
Sector privado	8,3	7,7	3,3	2,4	-0,2	0,2	1,5
Familias	3,7	3,8	1,7	1,5	0,3	1,3	(...)
Instituciones financieras	1,5	1,3	1,9	1,6	1,9	1,9	(...)
Empresas no financieras	3,1	2,5	-0,3	-0,8	-2,4	-3,0	(...)

Fuente: Banco de España.

tan exigente y competitivo como el de la Comunidad Europea.

Por lo tanto, la situación tan desequilibrada de la economía española en el momento actual no puede explicarse solamente en función de elementos estructurales. Es evidente que éstos existen y son muy determinantes, como indica el autor, en la capacidad que el país tendrá de aprovechar o no las ventajas tanto del mercado único como de la unión económica y monetaria.

Hay que incluir algo más que los economistas sabemos es fundamental: las políticas aplicadas. Y es desde esta perspectiva desde la que emerge una mayor responsabilidad del sector público español en comparación con otros actores y factores, como la falta de moderación salarial, que si bien ha actuado muy negativamente, dudamos de que lo haya sido tanto como la propia actuación del sector público. Por lo tanto, en España ha habido y hay dos problemas superpuestos: factores estructurales que se resisten al cambio y políticas erróneas de efectos «perversos». Claro que la persistencia de éstas a lo largo de amplios períodos históricos las convierten casi en un factor estructural más.

Desde este punto de vista, en la economía española deberíamos distinguir lo que son factores estructurales y lo que son manifiestas distorsiones. Entre los primeros, in-

cluiríamos las deficiencias de los mercados de trabajo, por ejemplo, que tan acertadamente destaca Viñals en su estudio. Los resultados son patéticos, como puede contemplarse con tristeza en el cuadro n.º 2. A 31 de marzo de 1993, trabajaban en España menos personas que en 1964. Toda la población activa creada en esos 28 años se ha incorporado al paro (en cifras netas). Además, 1,7 millones de funcionarios públicos han sustituido a otros tantos trabajadores del resto de la economía, que por lo tanto tiene hoy unos dos millones de trabajadores menos que en 1964. Estos datos, por muy matizados que estén por consideraciones sobre la economía sumergida, avalan la imperiosidad de un cambio fundamental del funcionamiento del mercado de trabajo español.

Las distorsiones, por su parte, pueden llegar a producir efectos tan nocivos como los propios factores estructurales. En particular y dentro de esta categoría, cabe destacar la sobrevaloración de la peseta, que prácticamente ha sido un resultado constante de todas las políticas económicas españolas seguidas desde 1959. La importancia de este «impuesto» a la producción local y consiguiente «subvención» a la importada no es ajena al peso insuficiente de las exportaciones españolas, tanto de bienes como de bienes y servicios, cuando se comparan con los países de la CE de tamaño similar.

A este respecto, los cuadros números 3 y 4 son bien significativos. Ponen de relieve dos hechos. Primero, en 1991 la distancia del peso de las exportaciones respecto al PIB

CUADRO N.º 2

EMPLEO Y PARO, 1964-1993
(Población en miles de personas)

Año	Activa	Empleada	En paro
1964	12.220	12.051	169
1974	13.404	13.005	399
1981	13.355	11.443	1.912
1985	13.839	10.870	2.969
1990	15.020	12.579	2.441
1992	15.193	12.146	3.047
1993, marzo	15.182	11.882	3.300

Fuente: INE, Banco de España.

CUADRO N.º 3
EL PESO DEL COMERCIO EN ESPAÑA Y LA CE, 1991
(En porcentajes del PIB) (1)

	1962		1991	
	Exportación	Importación	Exportación	Importación
España	5,4	10,4	10,2	15,2
Alemania	14,7	12,8	28,9 (2)	22,3 (2)
Francia	10,1	9,2	18,1	18,5
Italia	10,0	11,9	14,7	14,8
Reino Unido	14,1	14,2	18,2	19,8
Promedio de los cuatro países	12,2	12,0	20,0	18,8

(1) Importaciones y exportaciones FOB de mercancías.

(2) 1989.

Fuente: FMI.

CUADRO N.º 4
EL PESO DEL COMERCIO (BIENES Y SERVICIOS) EN ESPAÑA Y LA CE, 1991
(En porcentajes del PIB) (1)

	1962		1991	
	Exportación	Importación	Exportación	Importación
España	11,3	12,4	17,3	20,4
Alemania	18,4	17,2	35,5 (2)	29,0 (2)
Francia	12,3	11,0	22,7	22,3
Italia	12,4	14,4	17,9	18,5
Reino Unido	19,2	19,5	23,7	24,5
Promedio de los cuatro países	15,6	15,5	24,9	23,6

(1) Cifras de la contabilidad nacional.

(2) 1989.

Fuente: FMI.

español, tanto medidas con o sin servicios, comparada con el correspondiente promedio de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido es bastante mayor y significativa que para las importaciones. En éstas, la distancia es, en ambos casos, de algo más de 3 puntos, mientras que en las exportaciones es de 10 y 7,5 puntos, sin o con servicios respectivamente. El segundo hecho a constatar es que mientras la distancia entre importaciones españolas y las de los cuatro países aludidos ha variado poco desde 1962, se ha incrementado notablemente en el caso de las exportaciones.

Sólo introduciendo plenamente la distorsión del tipo de cambio se explica que el importante esfuerzo inversor de la segunda mitad de los años ochenta haya dejado a las empresas españolas con la poca capacidad exportadora que indican estas cifras y las de apertura comercial que ofrece el autor en el cuadro n.º 1. Se puede aducir, como hace Viñals, problemas de tamaño, de debilidad tecnológica, de una estructura financiera dependiente y de unos insumos no comerciables caros. Indudablemente, estos factores pueden ser importantes para estancar la productividad, pero ni su papel está claro

—por ejemplo, el tamaño— ni sería difícil encontrar países que los compensan y son exportadores notables.

Esta importancia compartida que atribuimos a los problemas estructurales de la economía española y a las políticas erróneas aplicadas no invalida para nada el análisis de Viñals, mucho más centrado en el primer aspecto, aunque es justo decir que no ignora el segundo, al que dedica todo el capítulo cuarto. Nuestra posición es la de que las políticas aplicadas pueden compensar en parte o, por el contrario, exacerbar los defectos estructurales del país. En el caso español, concluiríamos

que el segundo camino ha sido el más transitado en el período que va desde mediados de los años ochenta.

En definitiva, hay dos maneras de contemplar el futuro de la realidad económica española. En un caso, es preciso poner todos los elementos estructurales en orden para ir adelante. Es una visión racional y objetiva. Busca soluciones definitivas. Otro punto de vista acentuaría más bien el papel de las políticas. Se trata de una visión más «activista» de la economía, seguramente más próxima a la política, acostumbrada a sacar el máximo partido de lo que se tiene entre manos.

No se trata de visiones incompatibles; son más bien complementarias. Sin políticas económicas adecuadas que los propicien no habrá cambios estructurales duraderos; pero sin éstos, ninguna política económica será eficaz en el largo plazo. Pero en el corto e, incluso medio plazo, las políticas económicas correctas pueden hacer mucho para compensar los problemas estructurales de la economía española.

Es quizás este «activismo» el que nos lleva a disentir del autor cuando parece abandonar toda esperanza de poder activar la economía española de forma independiente. En primer lugar, cabría mencionar a países como Gran Bretaña, fuera del SME, y Francia, dentro de él, que han adoptado políticas para reactivar la economía de forma autónoma. En segundo lugar, la afirmación del autor encierra una hipótesis discutible: que siempre es más rentable para España esperar, desde dentro del SME, que Europa se ponga en marcha que salirse de él, reactivar la economía y asumir, con ello, riesgos. ¿Pero es que la actual espera no los tiene? ¿Y graves?

En definitiva, Viñals ha hecho una aportación muy importante para comprender lo que pasa en la economía española y para valorar todo lo que hay que hacer para aprovechar los grandes retos del mercado único europeo y de la unión económica y monetaria. Nuestros comentarios han de verse como un deseo de

complementar su impecable presentación con la importancia que también creemos tienen las políticas económicas para navegar en un mar tan tempestuoso como es el de la actual situación económica española, incluso antes de que amaine el temporal, y también para comprender mejor por qué esos vientos son tan devastadores.

NOTA

(*) Este comentario ha sido escrito en junio de 1993.